



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, Junio 16 de 2022

Radicado: 05001 31 05-005-2017-00555-00  
Demandante: MARILUZ BARRANTES FLÓREZ.  
Demandado; COLPENSIONES.  
Asunto:. APELACIÓN DE SENTENCIA.  
Tema: PENSIÓN DE INVALIDEZ.

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones de la Ley 2213 de 2022

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencian causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

La accionante instauró proceso ordinario en contra de COLPENSIONES a fin de que se declarara la nulidad del dictamen de PCL emitido por la entidad y en su lugar se declare que presenta una PCL del 50.83% con fecha de estructuración del 11 de julio de 2016; y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de invalidez desde la fecha de estructuración, junto con el retroactivo causado e intereses moratorios junto con la actualización monetaria d las condenas.

Para respaldar sus pretensiones, indicó que fue afiliada al RPM, que a través de dictamen emitido por COLPENSIONES se le asignó una PCL del 27,85% con fecha de estructuración del 23 de octubre de 2016; que fue calificada por la IPS DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA el 17 de febrero de 2017 y en dicho dictamen se estableció una PCL del 50,83% y con fecha de estructuración del 11 de julio de 2016.

Afirma que cuenta con los requisitos legales para acceder a una prestación económica por invalidez desde el 11 de julio de 2016, razón por la cual elevó solicitud de prestación por invalidez ante el fondo, quien a la fecha de presentación de la demanda no se había pronunciado.

El A quo, tras valorar los diferentes dictámenes obrantes en el plenario, le otorgó mayor validez al aportado con la demanda y que fue emitido por la IPS UNIVERSITARIA, ordenando a COLPENSIONES reconocer y pagar pensión de invalidez desde el 14 de agosto de 2018 para lo cual tuvo en cuenta la última incapacidad cancelada a la demandante. Calculó un retroactivo por valor de \$10.947.800 entre el 14 de agosto de 2018 y el 31 de agosto de 2019, absolvió de los intereses moratorios y condeno a la demandada a seguir reconociendo pensión de invalidez en cuantía del salario mínimo.

Inconforme con la decisión fue recurrida por la parte demandante, quien indicó como único reproche el cálculo del retroactivo de la pensión, pues considera que el mismo debe reconocerse desde la fecha de estructuración, es decir, el 11 de julio de 2016, por cuanto para esa fecha se hizo exigible la prestación y la última incapacidad recibida por la demandante solo fue por 11 días sin que sea posible en razón de ello desconocerle las mesadas que se causaron desde la estructuración.

La apoderada de COLPENSIONES solicitó se revoque la decisión adoptada en primera instancia, indicando que el dictamen en el que fundamenta la decisión, el a quo no le es oponible, en tanto no fue emitido por una de las entidades habilitadas para ello según la ley 100 de 1993, dijo que no es posible valorar una depresión que la demandante manifestó tener sin fundamento médico. Finalmente, solicitó que en

caso de confirmar la decisión de primera instancia se mantenga la absolución de intereses moratorios.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, la apoderada de COLPENSIONES reiteró los argumentos ya expuestos en el recurso de apelación indicando que no es procedente declarar la nulidad del dictamen emitido por la entidad que representa y darle validez a uno nuevo que aporta la demandante, cuando dejó de agotar por ejemplo los recursos de ley que tenía a su alcance si consideraba que el dictamen con el que se calificó inicialmente presentaba yerros, dijo que no es posible que al momento de calificar a la demandante se tengan en cuenta situaciones como la depresión cuando no existe ningún documento de la historia clínica que lo respalde. Finalmente, solicitó revocar en su integridad la sentencia dictada en primera instancia y declara prospera la excepción de inexistencia de la obligación.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que en este caso se encuentran por fuera de discusión que 1) la señora LUZ ESTELLA HERRERA DE GARCÍA fue calificada por COLPENSIONES con dictamen del 8 de diciembre de 2016, en donde se le dictaminó una PCL del 27,85% de origen común y con una fecha de estructuración del 23 de octubre de 2016 (fl.32). 2) que fue calificada por la IPS UNIVERSITARIA el 17 de febrero de 2017 en la que se tuvieron en cuenta las enfermedades de SÍNDROME DE MANGUITO ROTATORIO, GONARTROSIS, COXARTROSIS MIEMBRO INFERIOR DERECHO y DEPRESIÓN, en donde se le calificó con una PCL del 50,83%. 3) Que según historia laboral del 9 de agosto de 2017, la demandante acreditaba un total de 1,011,06 semanas cotizadas. 4) reposa historia clínica de la demandante (fl.82 a 314). 5) que el A quo decreto como prueba de oficio que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia calificara a la demandante, lo cual se cumplió el 10 de mayo de 2018, en el que se le dictaminó una PCL del 42,98% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 19 de agosto de 2016.

De conformidad con lo anterior, en esta instancia se discute si la demandante reúne los requisitos para que se le reconozca la pensión de invalidez que se reclama, si el dictamen tenido en cuenta para la decisión de primera instancia le es oponible a la demandada COLPENSIONES y si la demandante tiene derecho a que se le reconozca retroactivo desde la fecha de estructuración y no desde el último pago de incapacidad.

El artículo 39 de la ley 100 de 1993 dispone que tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado que sea declarado inválido y además acredite 50 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración.

El artículo 38 ibidem establece que se considera que una persona es inválida cuando ha perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

Además, en el artículo 42 y 43 de la mencionada ley indica que las entidades llamadas a establecer la pérdida de capacidad laboral de una persona son «son organismos del Sistema de la Seguridad Social del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio de Trabajo, con personería jurídica».

Respecto de las entidades encargadas de calificar el estado de invalidez de las personas, la H. Corte Constitucional, en sentencia C-1002-2004, señaló que «el dictamen de las juntas de calificación es la pieza necesaria para la expedición del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión, propiamente dicho». Aclarando en dicha oportunidad que si bien los dictámenes certifican la incapacidad laboral, no resuelven de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez, ni producen efectos de cosa juzgada, ya que dicha figura exclusiva de la función jurisdiccional del Estado que «implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal».

En ese sentido, el conflicto que puede suscitar la calificación de la pérdida de capacidad laboral es atribuido a la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el artículo 2 del CPL y SS.

Por su parte, la H. Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en indicar que quien resuelve los conflictos que se presentan con los dictámenes que establecen la PCL es el juez ordinario, así en sentencia SL 2349 de 2021 indicó:

*Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes que emiten las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, en el curso del proceso, el juez puede, como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, en relación con la pretensión que se reclama. Y en ese contexto, tal dictamen no tiene que ser necesariamente emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez, sino que puede serlo por otro ente especializado en el asunto objeto de valoración.*

*Al definir un asunto en el que se opongan diferentes conceptos científicos sobre el estado de salud de una persona, los jueces pueden soportar su decisión en el que les ofrezca mayor credibilidad y poder de convicción. Sobre este particular, en la sentencia CSJ SL-4346-2020 la Sala asentó:*

*De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el estado de invalidez se determina, en primera oportunidad, por las entidades de seguridad social y las juntas de calificación de invalidez, conforme al manual único para la calificación vigente al momento de su práctica -decretos 917 de 1999 o 1507 de 2014, según el caso (...).*

*Aunque la Corte ha admitido la relevancia de los dictámenes que expiden las juntas de calificación de invalidez por tratarse de conceptos técnicos y científicos emanados de órganos autorizados por el legislador, lo cierto es que estos constituyen un medio de prueba y, como tal, deben someterse a la valoración del juzgador bajo los principios de libre formación del convencimiento y apreciación crítica y conjunta de la prueba, previstos en los artículos 60 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social (CSJ SL, 18 mar. 2009, rad. 31062, CSJ SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, CSJ SL3090-2014, CSJ SL9184-2016, CSJ SL697-2019, CSJ SL3380-2019, CSJ SL 3992-2019 y CSJ SL5601-2019). En esa medida, el juez no puede*

*simplemente ignorar las circunstancias que rodean el caso, la conducta procesal y los demás elementos probatorios adosados, pues todos, en conjunto, permiten determinar el momento en el que se produce, de manera definitiva, la disminución de la capacidad laboral de la persona.*

En esa oportunidad la H Corte dijo que el juez puede privilegiar uno de los dictámenes que obren en el proceso sin tener que considerar los demás dictámenes obrante en el mismo proceso, y que ello tiene respaldo en la posibilidad de apreciar libremente las pruebas.

Señaló en esa misma oportunidad que el juez puede acoger de manera parcial en lo referente al porcentaje de PCL y no de la fecha de estructuración, ya que es precisamente el juez del trabajo el que tiene el poder jurisdiccional para establecer el estado de invalidez y todas sus variables asociadas, esto es, el origen de la enfermedad o accidente, la fecha de estructuración y el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.

En palabras de la Corte:

*Al respecto, basta con reiterar que la Corte ha adocinado que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, con sus modificaciones, la más reciente de ellas contenida en el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, en el inciso segundo, señala que entidades pueden hacer la calificación inicial o en una primera oportunidad de la pérdida de capacidad laboral. Pero en modo algunos dichos dictámenes tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada, más cuando la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad de la norma en mención en sentencia C-120-2020 señaló que la finalidad se encaminaba a crear un trámite previo a dos procedimientos eventuales, uno administrativo y otro judicial.*

Descendiendo al presente caso, se tiene que aun existiendo 3 dictámenes de pérdida de capacidad laboral dentro del proceso, los cuales no hay duda que fueron integrados en legal forma y permitido a las partes conocer su contenido a fin de que

se pronunciaran si a bien lo tenían para ejercer su derecho de defensa, el a quo decidió otorgarle mayor valor probatorio al emitido por la IPS universitaria de la Universidad de Antioquia por encontrarlo más completo respecto de los diferentes padecimientos de la demandante.

Y es que si se observa detenidamente, encontramos que mientras en el dictamen expedido por la IPS UNIVERSITARIA se valoró la depresión de la demandante, en el dictamen emitido por la Junta Regional se omitió la valoración de este padecimiento, adicionalmente, ha de destacarse que el perito de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia fue citado a la audiencia con el fin de controvertir el dictamen por ella presentado y en la misma indicó que (min 39:20), para el presente caso es claro que la demandante no puede seguirse desempeñando como empleada doméstica, pues las diferentes dificultades médicas que presenta se lo impiden, razón por la cual la junta señala que debe cambiar de actividad laboral, y cuando el juez de instancia le pregunta que a que actividad laboral se le puede modificar su labor, indicó que la junta no es la llamada a determinar dicha situación.

Esta Sala, al igual que el A quo considera que el dictamen emitido por la IPS UNIVERSITARIA es el que se debe acoger, ya que, no sólo cumple con la normatividad vigente de calificación de PCL, sino que además, allí se le calificó el padecimiento de depresión el cual no fue tenido en cuenta por la Junta Regional. Finalmente, sea de paso indicar que no puede pasarse por alto que la demandante es una persona de más de 60 años de edad, que durante toda su vida laboral se ha desempeñado como empleada doméstica, razón por la cual, no es admisible que la Junta Regional no sólo no califique la depresión, sino que además indique que debe cambiar de ocupación, siendo claro que es en lo que ha laborado durante toda su vida laboral, además que no se trata de una empleada de servicios de aseo de una empresa en la que se le puedan designar otros cargos, sino que si labor está en atender un hogar, el cual por regla general no cuenta con otros empleados adicionales ni cargos en los cuales se le pueda cambiar la actividad para la que fue contratada.

En ese sentido, se acoge en su integridad el dictamen emitido por la IPS UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, declarándose que la demandante tiene una PCL del 50,83% con una fecha de estructuración del 11 de julio de 2016.

Entonces, acreditada como se encuentra la invalidez y comoquiera que con la historia laboral obrante en el proceso se logra acreditar que la demandante tiene más de 50 semanas antes de la estructuración de la misma, se tiene acreditado con ello los requisitos mínimos para acceder a la prestación que se solicita.

Ahora, en lo que tiene que ver con el reconocimiento del retroactivo pensional de la pensión de invalidez, se debe analizar en primero término que del artículo 40 de la ley 100 de 1993 en su último inciso establece:

La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

El artículo 41 de la ley 100 de 1993, inciso 5 establece respecto al pago de las incapacidades que:

*Para los casos de accidente o enfermedad común en los cuales exista concepto favorable de rehabilitación de la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Fondos de Pensiones postergará el trámite de calificación de Invalidez hasta por un término máximo de trescientos sesenta (360) días calendario adicionales a los primeros ciento ochenta (180) días de incapacidad temporal reconocida por la Entidad Promotora de Salud, evento en el cual, con cargo al seguro previsional de invalidez y sobrevivencia o de la entidad de previsión social correspondiente que lo hubiere expedido, **la Administradora de Fondos de Pensiones otorgará un subsidio equivalente a la incapacidad que venía disfrutando el trabajador.***

A su vez, para lo pertinente se hace preciso invocar lo establecido en el Artículo 3° del decreto 917 de 1999, el cual indica

*ARTÍCULO 3o. FECHA DE ESTRUCTURACIÓN O DECLARATORIA DE LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez.*

Ahora la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1562 de 2019 del 30 de abril del mismo año M.P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO, estudiando los artículos de las normas antes transcritas en cuanto al reconocimiento de la pensión de invalidez y la compatibilidad del subsidio de incapacidad y la pensión de invalidez indicó:

*Al respecto, se insiste en que el citado artículo 40 de la Ley 100 de 1993 es claro en indicar que la pensión de invalidez por riesgo común debe otorgarse, de manera retroactiva, a partir de la fecha en que se produce el estado de invalidez, es decir, desde cuando la pérdida de la capacidad laboral alcanza un porcentaje igual o superior al 50% (artículo 39 de la Ley 100 de 1993). De lo que se deriva que el legislador en el citado precepto no estableció ni explícita ni tácitamente, condición alguna, diferente al estado de invalidez, para proceder al reconocimiento del derecho pensional desde la fecha de estructuración.*

*Por tanto, ese estado de invalidez igual o superior al 50%, previamente determinado por el organismo médico competente, no puede entenderse disminuido o extinguido por el hecho de que el afiliado hubiese percibido pagos por concepto de incapacidades temporales, pues estos pagos no redundan en la disminución de la invalidez, cuyo amparo es el objetivo principal del derecho pensional.*

*De modo que, como bien lo dedujo el Tribunal, de cara a la incompatibilidad establecida en el artículo 3 del Decreto 917 de 1999, cuando, como en el presente asunto, el retroactivo pensional cubija periodos que también han sido cubiertos por subsidios por incapacidades temporales, la prohibición de que trata el citado decreto, a lo sumo, conduciría a la imposibilidad de que se disfruten o perciban, a la vez, la mesada pensional y el subsidio por la incapacidad, pero no a la imposibilidad del reconocimiento del derecho pensional.*

Posteriormente, en sentencia SL 5170 del 2021 rectificó la línea sentada en la disposición que antecede, indicando que cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzara a pagar sólo a partir del momento en que expide el derecho a la última incapacidad.

Ahora, esta Sala considera que, no obstante la posición rectificada por la H. Corte Suprema de Justicia, se aparta de ella, dando aplicación a la posición anterior por considerar que es la que más se apega a la finalidad de la norma, toda vez que, no puede entenderse que la contingencia de invalidez se cubrió desde la fecha de estructuración con las incapacidades emitidas cuando, desde la fecha de estructuración (11 de julio de 2016) sólo se le pagaron por parte de la EPS 80 días.

En consecuencia, el derecho pensional de invalidez, deberá ser reconocido por la administradora de pensiones desde la fecha en que se estructuró tal estado, sin perjuicio de que se le descuente los conceptos percibidos por incapacidad.

El retroactivo a reconocer queda así:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	5,75%	6 y 20 días	\$ 689.454	\$ 4.596.360
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022		5	\$ 1.000.000	\$ 5.000.000
			TOTAL	\$ 63.330.612

Retroactivo del que se autoriza descontar lo percibido por la demandante por concepto de incapacidades y los aportes en salud. A partir del 1 de junio de la presente anualidad, COLPENSIONES deberá seguir reconociendo una mesada pensional en cuantía del SMMLV que para este año asciende a la suma de

\$1.000.000 sin perjuicio de los incrementos anuales que decrete el Gobierno Nacional y con 13 mesadas anuales.

Costas en esta instancia a cargo de COLPENSIONES y a favor de la demandante, se fijan en la suma de 3 SMMLV.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la república de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, CONFIRMA y MODIFICA, la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

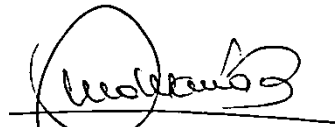
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**

*Sin firma por ausencia justificada*

**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001 31 05-005-2017-00555-00  
Demandante: MARILUZ BARRANTES FLÓREZ.  
Demandado; COLPENSIONES.  
DECISIÓN: CONFIRMA Y MODIFICA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 28 de junio de 2022 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 idíbem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

  
RUBÉN DARIO LÓPEZ BURGOS

**SECRETARIO**

